

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”

Mi vida y el Palacio: 6 y 7 de noviembre de 1985. La vida de Carlos Horacio Urán y la lucha de su familia por la verdad

HELENA URÁN BIDEGAIN

Planeta, Bogotá, 2020, 220 pp.

SU NOMBRE era Carlos Horacio Urán. Fue un investigador, escritor, militante social que luchaba por un mejor país, participante en diversos círculos políticos y defensores de derechos humanos. Se atrevió a estudiar en forma independiente a las Fuerzas Armadas estatales, algo que es un riesgo en un lugar donde los militares son amos y señores, aunque formalmente se diga que son un sector que “respeto la institucionalidad” y está subordinado al poder civil. Ese poder militar que Carlos Urán había examinado en términos históricos, sociológicos y políticos dejó de ser para él mismo una cuestión teórica y se convirtió en una dura realidad, tan dura que le costaría la vida. Una de sus “peligrosas” recomendaciones sobre el tema, que le cobraron letra a letra los militares colombianos, señalaba: “Pensamos [...] que desde la dimensión popular, solo existe hoy una alternativa en relación con las Fuerzas Armadas: su replanteamiento estructural y su redefinición ideológica, o su liquidación... que adoptó constitucionalmente nuestro vecino Costa Rica” (pp. 55-56).

Además de todos estos elementos que forman parte de la biografía política del entonces joven abogado colombiano, en su vida privada era un ejemplar padre de familia que adoraba a sus cuatro pequeñas hijas, una de las cuales tenía meses de edad en noviembre de 1985. El Estado colombiano y sus Fuerzas Armadas les arrebataron a esas niñas su padre, aquel aciago 7 de noviembre.

Carlos Urán fue uno de los colombianos (algo más de un centenar) que murieron en la retoma del Palacio de Justicia por la acción de las Fuerzas Armadas durante 27 terribles horas, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Hoy está claro lo que sucedió con este magistrado auxiliar del Consejo de Estado,

cuya oficina se encontraba en el Palacio. A las 2:17 de la tarde del jueves 7 de noviembre salió del humeante edificio, cojeando, y apoyándose en un soldado. Fue su última imagen, porque luego el Ejército lo llevó a algún lugar cercano donde lo golpearon y ejecutaron, y lo volvieron a introducir al Palacio a eso de las cuatro de la tarde. Poco después trasladaron el cadáver a Medicina Legal, a pocas cuadras, lo lavaron con agua para borrar los rastros del crimen y lo mezclaron con otros muertos del Palacio. A tiempo, casi por azar, fue identificado por familiares y conocidos, antes de que fuera metido a una fosa común. Aunque en el mismo instante de los acontecimientos un noticiero de televisión captó las imágenes de su salida del Palacio, pasarían 22 años para que llegara a la luz pública este crimen de Estado, cuando una valiente fiscal se atrevió a indagar a fondo sobre lo acontecido y otro noticiero de televisión divulgó, con irrefutables pruebas documentales, los pormenores de ese terrible suceso.

En este momento entra en escena Helena Urán Bidegain, una de las cuatro hijas del magistrado, quien al momento del asesinato de su padre tenía diez años. El libro es un relato conmovedor de la experiencia de esta mujer que perdió a su padre siendo niña, un hecho que fracturó su existencia, como les ha sucedido a miles de colombianos que forman parte de esas generaciones de niños que han crecido sin padre o madre, pues les fueron arrebatados por la vorágine de la violencia estatal.

Este es un relato en primera persona, a partir de la “experiencia vivida”, de la violencia institucional, con sus secuelas de intolerancia, cinismo, impunidad, mentiras, desinformación y complicidad con los criminales en uniforme, por parte de importantes sectores de la sociedad.

La obra contribuye a clarificar aspectos centrales sobre la masacre del Palacio de Justicia. Su aporte no estriba –ese no es su objetivo– en brindar nuevas fuentes que clarifiquen lo sucedido, sino en iluminar el trasfondo humano de la tragedia, con sus grandezas y miserias. En esta dirección, las vivencias de la autora nos muestran la sociedad colombiana a partir de un caso brutal. Desde 2007, Helena Urán confirmó de

manera directa las desigualdades de clase de la sociedad colombiana, con un simétrico modelo de (in)justicia también de clase. Pueden destacarse algunos elementos que impactan de esa “experiencia vivida” por la autora:

En Colombia hasta el dolor y el duelo tienen sello de clase. En abstracto, se afirma que el dolor une a la gente, con independencia de su procedencia social, y se esperaría que existiera una cierta solidaridad con el sufrimiento de las personas que perdieron familiares en la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Desgraciadamente, a unos muertos se les atribuye más importancia y valor que a otros, en una simétrica diferenciación de clase posmórtem. En concreto, mientras los hijos y familiares de los desaparecidos han luchado para establecer lo que sucedió con ellos, denunciando al Estado y a las Fuerzas Armadas, los familiares de los altos magistrados de la Corte y del Consejo de Estado jamás se solidarizaron con esas personas, en una clara segmentación (de clase) del dolor. Algunos familiares de los magistrados aceptaron la “razón de Estado” como explicación de lo sucedido, salvando la responsabilidad de las instituciones, y por eso jamás concibieron la posibilidad de mezclarse en una lucha conjunta con los familiares de los desaparecidos. Un hecho indica con elocuencia esta segmentación del dolor: cada 6 de noviembre se realizaban dos ceremonias religiosas separadas. Una celebración era organizada por la Corte Suprema de Justicia en la Catedral Primada y a esta concurrían los familiares de los magistrados muertos; pero ni siquiera todos, porque deliberadamente no se invitaba a los familiares de Emiro Sandoval Huertas, un magistrado auxiliar que no merecía reconocimiento en la ceremonia de alta alcurnia, y esto se llevó al extremo de que ni siquiera les fue entregada la corona de flores para colocarla en la tumba de su ser querido. La otra ceremonia la efectuaban los familiares de los desaparecidos, en otra iglesia. “Todo sucedía sin mezclarse, ni juntarse, como si fueran dos hechos o tipos de seres humanos distintos, reproduciendo nuevamente las enormes divisiones de la sociedad colombiana” (p. 99).

El cinismo de los que se lucran de la impunidad. Helena Urán comprobó la (in)justicia colombiana y también cómo

RESEÑAS		HISTORIA
la impunidad que de allí se desprende permea la mentalidad de los criminales y sus familiares, porque se ha movido en diversos ámbitos judiciales. Al respecto ella recuerda que, en ciertas ocasiones en que se encontró con familiares de militares implicados como victimarios en los sucesos del Palacio de Justicia, escuchó una inhumana justificación de los criminales: no había que acusarlos de desaparición forzada, por el sencillo hecho de que en 1985 no estaba tipificada esa conducta criminal como delito (p. 187). <i>La impunidad de quienes son responsables de la masacre.</i> Menciona al ministro de Gobierno de Belisario Betancur, a Jaime Castro, reputado jurista y político del Partido Liberal, quien en los días siguientes a la masacre dejó consignada en una de las actas del Consejo de Ministros esta “humanitaria” sugerencia: “Se deben evitar los entierros con manifestaciones, que lo ideal sería inhumarlos en la fosa común” (p. 173). <i>El acoso a los familiares de los asesinados y desaparecidos.</i> En Colombia, después de que el Estado y sus instituciones militares han matado a alguien, los familiares no tienen derecho a reclamar y cuando lo hacen inmediatamente sufren acoso, persecución, amenazas, atentados para acallarlos, y en muchos casos los matan. Ese acoso lo ha soportado en carne propia la autora del libro, quien proporciona ejemplos concretos de las señales que le hacía llegar el Ejército para acallarla u obligarla a salir del país. También lo habían vivido los miembros de la familia Urán Bidegain desde 1985, obligados a exiliarse tras recibir múltiples amenazas. <i>La “ingenuidad” cómplice de ciertos personajes con las Fuerzas Armadas.</i> Helena Urán indica que un magistrado, liberado por el M-19 para que sirviera como mediador y entregara un mensaje al Estado, encaminado a entablar un posible diálogo, se convirtió motu proprio en informante que proporcionó datos concretos al Ejército sobre el lugar donde estaban atrincherados los guerrilleros y los magistrados, y esto facilitó la masacre. <i>La inoperancia absoluta de la justicia o, mejor, su conversión en un aparato hecho para afirmar la desigualdad y la persecución a los pobres, y preservar la impunidad de los poderosos.</i>	Este es uno de los hilos conductores del relato de Helena Urán, y lo ha soportado en forma directa con respecto al asesinato de su padre. Lo sintetiza bien con esta fórmula: “La daga del asesino estaba escondida bajo la bata del jurista” (p. 155). Estas vivencias forman parte de la claridad política que Helena Urán adquirió después de 2007, porque, como señala, ella y sus familiares estuvieron en silencio durante casi un cuarto de siglo, sin denunciar lo acaecido con Horacio Urán y sin mezclarse en la lucha de los familiares de desaparecidos. En 2007, sin embargo, le sucedió un poco lo del breve cuento de Augusto Monterroso, porque al despertar de ese largo sueño de un cuarto de siglo descubrió que el monstruo del terrorismo de Estado en Colombia seguía ahí, vivo y brutal como siempre. Lo señala en forma directa: “Comencé a entender que a mi padre lo habían asesinado por razones políticas en un país en donde incomprensiblemente le seguía ocurriendo a miles más” (p. 151). Lo significativo es que, tras despertar de ese largo sueño, comprendió la importancia de luchar por la verdad y contra la impunidad del Estado colombiano y sus Fuerzas Armadas, a tal punto que esto se había convertido en una “imperiosa necesidad y un compromiso con no ceder al silencio”. Por ello, “mi compromiso era no volver jamás a callar: durante casi veinticinco años lo había hecho y había llegado el momento de decir, de exponerse, de no huir de mí misma, de honrar la memoria de los míos, de mi padre, y la mía, por supuesto” (p. 175). Y como parte de ese compromiso se encuentra este impactante libro testimonial sobre uno de los peores crímenes estatales en la historia contemporánea de Colombia, cuyos efectos siguen gravitando sobre las vidas de todos nosotros, seamos o no conscientes de ello. Renán Vega Cantor Profesor Universidad Pedagógica Nacional	